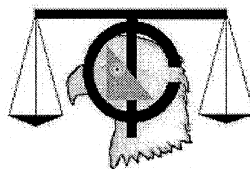




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, siendo las 11:00 horas del día 26 de Agosto de 2009, se reúnen los Miembros del Tribunal de Cuentas, a fin de dar tratamiento plenario al **Expediente Letra: T.C.P. N° 221/08 del registro de este Tribunal de Cuentas, caratulado: "S/ JUICIO DE RESIDENCIA NESTOR ADOLFO CONTINI."**-----

Liminarmente, los suscriptos dejan constancia que, encontrándose las actuaciones en instancia de análisis por parte del Cuerpo Plenario de Miembros, se produjo la rotación anual de la Presidencia de este Tribunal, conforme lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Provincial 50; dictándose la Resolución Plenaria N° 104/09, estableciendo en su artículo 2° que, para el período comprendido desde el 1 de julio de 2009 hasta el 30 de junio de 2010 inclusive, “...la Vocalía Legal y de Auditoría del Tribunal de Cuentas estarán conformadas y/o integradas respectivamente de la siguiente manera: VOCALÍA LEGAL por el Dr. Miguel Longhitano Vocal Abogado (Presidente) y CPN/Dr. Claudio RICCIUTI Vocal Contador, y VOCALÍA DE AUDITORÍA por el Dr. Miguel Longhitano Vocal Abogado (Presidente) y CPN Luis Alberto Caballero Vocal Contador (Vocal de Auditoría), todo ello conforme lo dispuesto en el exordio del presente y artículo 18 de la Ley Provincial N° 50.”.

Habiendo analizado las actuaciones en primer término el C.P.N. Luis Alberto CABALLERO, seguidamente se transcribe su Voto: “...Que las presentes actuaciones comienzan con la presentación “Inicia Juicio de Residencia. Constituye domicilio especial” el 02 de julio de 2008 por parte del Sr. Nestor Adolfo Contini (fs. 1/9).-----

El 21 de agosto de de 2008 (fs. 12) mediante Resolución Plenaria Nro. 110/2008 se designa como Auditor Fiscal al C.P.N. Rafael Chorén para que intervenga en las actuaciones de referencia, en el marco de la Resolución Plenaria N° 51/2004, el cual de ser necesario contaría con el asesoramiento jurídico de la Dra. Romina Pereyra.-----

A fojas 86 y 87 obra copia del Boletín Oficial (publicación 24 y 26 de septiembre de 2008) dando cuenta del inicio del Juicio de Residencia de Néstor Adolfo Contini y convocando a toda la ciudadanía a la radicación de las denuncias que estimen pertinentes sobre apartamiento a la legalidad en que pudiera haber incurrido el funcionario saliente, las que deberían ser presentada por escrito en el Tribunal de Cuentas y dentro de los diez (10) días de su última publicación. Asimismo y en igual sentido obran a fs. 80/83 constancia de publicación de Edictos los Diarios “El Diario del Fin del Mundo” y “Provincia 23” de la ciudad de Ushuaia y Río Grande los días 18, 19, 23 y 24 de septiembre de 2008.-----

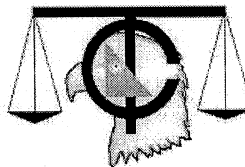
El 24 de noviembre de 2008 el Auditor Fiscal presenta Informe N° 596/08 Letra T.C.P. - ADM. CENTRAL dirigido a la Secretaría Contable informando que en el marco de la Ley Provincial N° 619 y la Resolución Plenaria N° 51/04 se libraron oficios a los quince (15) Juzgados de la Provincia y a la Fiscalía de Estado de la Provincia, publicaron edictos y se



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

REGISTRADO BAJO EL N°

001828



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

circularizó a las Secretarías Contable y Legal, Auditores Fiscales y Abogados del Tribunal de Cuentas.-----

Al respecto expresa el Auditor Fiscal que se efectuó una tarea profesional acorde al marco de las normas aplicables al caso, ello a fin de expresarse sobre la presunción de la existencia de perjuicio fiscal basado en la recopilación de la información suministrada por terceros actuantes.-----

Indica el Auditor Fiscal que ha tomado conocimiento de lo dispuesto por Acuerdo Plenario N° 1668 del 23 de septiembre de 2008, mediante el cual se le aplica una multa al funcionario sujeto a Juicio de Residencia, respecto de la cual la Secretaria Legal informa que no obstante haber sido emitido tal acto administrativo con posterioridad al cese como funcionario, dicha circunstancia no afecta la validez de la multa impuesta ya que es consecuencia de la falta de observación por parte del mismo de conductas propias a su cargo, y que al respecto la aplicación de la multa al 20 de octubre de 2008 se encontraba en pleno trámite.-----

En relación a los oficios librados a los Juzgados, el Auditor Fiscal da cuenta que no ha recepcionado respuesta los Juzgados de Minoridad y Familia y Correccional del Distrito Judicial Sur e Instrucción del Distrito Judicial Norte, lo que a su entender constituye limitaciones al alcance del trabajo realizado, no obstante lo cual lo considera no significativas por la naturaleza de los Juzgados que no han contestado.-----

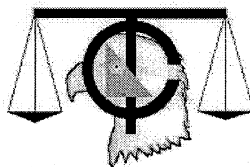
Asimismo el Auditor da cuenta que el Ministerio de Economía informó que no se registran Sumarios e Informaciones Sumarias que involucren al funcionario sujeto a Juicio de Residencia.-----

Finalmente concluye el Auditor que con la documentación que se adjuntara en estos obrados que involucra a Néstor Adolfo Contini que fuera designado en el cargo de Secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, durante el período comprendido entre el 18/12/2007 y el 01/07/08, con los alcances y responsabilidades expresadas, como asimismo lo vertido en los distintos puntos relacionados al Anexo I de la Resolución Plenaria N° 51/04 del Informe, aportan suficientes elementos que permiten aprobar las presentes actuaciones ya que no surge de las mismas la presunción de perjuicio patrimonial por parte del funcionario indicado, por el período de duración de su cargo, con la salvedad del Acuerdo Plenario N° 1668/08; por ello es que sugiere a la Vocalía de Auditoría la aprobación de las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiere corresponder al funcionario saliente de acuerdo a lo previsto en el Capítulo XII de la Ley Provincial N° 50, y art. 3° de la Ley Provincial N° 264, modificada por su similar N° 619. -

Mi opinión: En esta instancia corresponde a esta Vocalía emitir el voto, ello en el marco de lo señalado por el art. 190 de la Constitución Provincial que establece: "*Los funcionarios que ocupen cargo electivos, así como los ministros, secretarios y subsecretarios, tanto*



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

provinciales como municipales y comunales, no podrán abandonar la Provincia hasta después de cuatro meses de terminadas sus funciones, salvo expresa autorización de la Legislatura Provincial o de los cuerpos deliberativos municipales, por estar sometidos a juicio de residencia.-----

Que dicho juicio de residencia se encuentra reglado por Ley Provincial N° 264, conforme modificación de la ley Provincial N° 619, la que en el art. 1° establece: “*Los funcionarios mencionados en el artículo 190 de la Constitución Provincial estarán sujetos a Juicio de Residencia ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia por el término de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización de su mandato o cese de su mandato...*” .-----

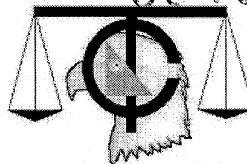
El artículo 3° de la ley 264, según sustitución de la ley 619 señala que: “*Los funcionarios mencionados en el artículo 1° deberán dar pleno cumplimiento a las normas que al efecto dicte el Tribunal de Cuentas, las cuales deberán tener la aprobación de la Comisión creada por esta ley, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se les efectuará un cargo preventivo automático igual al importe de los bienes que estuvieron bajo su responsabilidad y/o por el importe total de la rendición de cuentas no efectuada procediéndose, en esta instancia, al enjuiciamiento dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley provincial 50 y sus modificatorias fijándose, a este efecto, en tres (3) años el plazo de prescripción para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial.*” .-----

El art. 4° de la ley 264 establece que: “*Sin perjuicio de las restantes obligaciones fijadas en esta ley, quienes estén alcanzados por sus disposiciones deberán constituir domicilio especial ante el Tribunal de Cuentas en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, y dentro de los tres (3) días de haber dejado el cargo, el que se considerará subsistente por el término de prescripción a que se refiere el artículo 3°, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen. El incumplimiento de esta obligación implicará que las disposiciones que se dicten quedarán automáticamente notificadas al día siguiente de su dictado.*” .-----

Que mediante Resolución Plenaria N° 51/04 de fecha 26 de marzo de 2004 el Tribunal de Cuentas reglamentó el procedimiento para la Rendición de Cuentas estatuido por la ley 264, en la que se destaca en el capítulo titulado “Informe del Auditor Fiscal “ que: “*Con la información relevada en las diferentes etapas de control al que fue sometido el funcionario saliente a lo largo de su gestión, sin perjuicio de otras actividades de control que el Auditor Fiscal estime conveniente realizar, el Auditor Fiscal elaborará un Informe en el cual propondrá al Vocal de Auditoría la aprobación definitiva de las rendiciones o la acusación; esto último en caso de presumir la existencia de perjuicio fiscal. La acusación del Auditor Fiscal no podrá extenderse más allá de los 60 días desde la presentación de la Declaración Jurada de Cese de Funciones por parte del funcionario sometido a Juicio de*



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Residencia. De las actuaciones se dará traslado al funcionario bajo juicio, otorgándosele un término de 10 días para sus descargos...".-----

Teniendo en cuenta el marco normativo sobre el cual basar el análisis para emitir el voto, cabe indicar, que el Sr. Néstor Adolfo Contini se encontró en funciones hasta el día 01 de julio de 2008 (fs. 11), presentó la Declaración Jurada por Cese de Funciones el día 02 de julio de 2008 (fs. 1/9) y constituyó domicilio a los efectos de la misma dentro del plazo legal de tres (3) días establecido por el art. 4º de la Ley Provincial 264, dando por ello cumplimiento a la manda legal.-----

Por lo expuesto emerge que si el funcionario, sujeto a Juicio de Residencia, presentó Declaración Jurada de Cese de Funciones en término, en ajuste a derecho, corresponde que el Auditor Fiscal dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde dicha presentación elabore un Informe en el cual proponga al Vocal de Auditoría la aprobación definitiva de las rendiciones o la acusación, en caso de entender la existencia de perjuicio fiscal.-----

Que el Auditor Fiscal el 24 de noviembre de 2008 presentó Informe Nro. 596/08 Letra T.C.P. - ACM. CENTRAL (fs. 106/108), proponiendo la aprobación de las presentes actuaciones ya que no se encuentren elementos para determinar, en esta etapa, la existencia de perjuicio patrimonial por parte del Funcionario sometido a Juicio de Residencia por el período en que fuera Secretario de Hacienda del Ministerio de Economía.-----

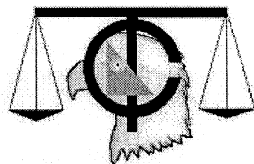
Sin perjuicio de lo señalado por el Auditor debo dejar constancia que se encuentran vencidos los plazos legales establecidos para que este Vocal de Auditoría formule acusación, toda vez que la norma indica que esta, de así corresponder, deberá materializarse una vez presentado el Informe por parte del Auditor Fiscal dentro de los sesenta (60) días contados desde la presentación de la Declaración Jurada del funcionario saliente.-----

Ergo si se contempla el lapso de tiempo transcurrido desde la presentación de la Declaración Jurada, 02 de julio de 2008 (fs. 1/9), dable es concluir que a la fecha se encuentra fenecido el plazo dentro del cual se podría haber formulado acusación conforme lo establecido por el art. 190 de la Constitución Provincial, Ley 264 y Resolución Plenaria N° 51/04, deviniendo en consecuencia en abstracto el tratamiento de la cuestión analizada.--

Así lo ha expresado el Superior Tribunal de Justicia en los caratulados “Martinelli Roque Luis c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de Inconstitucionalidad – Medida Cautelar” Expte. Nro. 904/99 – STF – SDO “...el plazo de cuatro meses es el lapso máximo en que puede tramitarse y resolverse el citado juicio, pues durante ese término – cuatro meses- el ex funcionario está sometido a juicio y no puede ausentarse de la Provincia (“...no podrán abandonar la Provincia...por estar sometidos a juicio de residencia”). Esta limitación de ausentarse del territorio provincial tiene sentido si se lo relaciona a la necesidad de comparecencia ante el tribunal, al estar sometido a juicio. Sería absurda la disposición constitucional acerca de la imposibilidad de abandonar la Provincia en el término de



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

cuatro meses, si el juicio pudiera iniciarse al fin de ese período, y tramitarse y finalizarse después de ese lapso, cuando el ex funcionario ya puede ausentarse de aquella...” (Del Voto del Dr. Tomas Hutchinson).-----

“...Obvio es resaltar que una cosa ese el término dentro del cual debe tener lugar la acusación y otra muy distinta es el termino durante el cual ha de sustanciarse el procedimiento, entendido como el conjunto de actos que permiten, como fin inmediato, determinar los hechos y pronunciarse sobre ellos, y como fin mediato, la actuación de la ley; en nuestro caso, de una norma expresa de la Constitución de la Provincia. Entenderlo de otro modo equivaldría a decir, por ejemplo, que una acción penal iniciada un día antes del término de prescripción tendría que sustanciarse en un día, lo cual es insostenible y contrario a los dispuesto por el art. 27 del Código Civil...” (Del Voto del Dr. Omar Alberto Carranza).-----

Por lo precedentemente señalado, enrolándose en una u otra de las posturas sustentadas en los votos transcritos esta Vocalía no podría formular acusación en virtud de encontrarse, en cualquiera de ellas que se pretenda adoptar, vencidos los plazos legales para la sustanciación del trámite por ante este Tribunal, sumado a ello la circunstancia que el Auditor Fiscal interviniente no halló elementos que permitan determinar la configuración de perjuicio fiscal que le fuera imputable al funcionario saliente.-----

Asimismo, es dable destacar que la demora en el trámite no es imputable al Auditor Fiscal ya que este fue designado el día 21 de agosto de 2008, mediante Resolución Plenaria N° 110 obrante a fs. 12 y no hay constancia en estos obrados de la fecha en que fuera notificado.-----

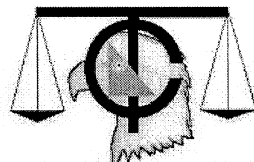
Como consecuencia de lo señalado precedentemente propicio se haga saber a la Secretaria de Plenarios, a fin de dar cumplimiento con el trámite dispuesto por Resolución Plenaria N° 51/04, que una vez remitidos los expedientes, conforme surge a fs. 11 vuelta, deberá procurarse la designación del Auditor Fiscal en lo inmediato a fin de estarse a los plazos señalados por el art. 190 de la Constitución Provincial, Ley 264 y Resolución Plenaria 51/04.-----

Asimismo deberá ponerse en conocimiento del Sr. Auditor Fiscal que en Juicios de Residencia debe colectarse la información requerida a los juzgados oficiados toda vez que la misma reviste extrema importancia al momento de formular aprobación definitiva de las rendiciones o la acusación del funcionario sujeto a Juicio de Residencia.-----

Por lo reseñado propicio se dicte un acto administrativo que disponga: a- Declarar la culminación del presente trámite en virtud de encontrarse fenecidos los plazos legales dentro del cual este Tribunal puede formular acusación, sin perjuicio de que en dicho trámite no se constató la existencia de perjuicio fiscal ocasionado por el Sr. Néstor Adolfo Contini.-----



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

b- Hacer saber a la Secretaria del Plenario de Miembros que una vez recepcionados los expedientes que tramitan Juicios de Residencia deberá procurarse la designación del Auditor Fiscal en lo inmediato a fin de estarse a los plazos señalados por el art. 190 de la Constitución Provincial, Ley 264 y Resolución Plenaria 51/04.-----

c- Hacer saber al Auditor Fiscal C.P.N. Rafael Chorén que en Juicios de Residencia deberá recabarse la información requerida a los juzgados oficiados, poniendo de resalto que a tal fin cuenta con el asesoramiento Jurídico que se dispone en la Resolución Plenaria de designación.-----

d- Del Acto Administrativo que se dicte, notificar a la Secretaria del Plenario de Miembros, Mónica L. Arnold y al Auditor Fiscal C.P.N. Rafael Chorén, para su conocimiento.-----

e- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se libre cédula a la Comisión de Seguimiento Legislativo de Juicio de Residencia a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo I de la Resolución Plenaria N° 51/04, informando lo actuado con remisión de copia íntegra y certificada de las presentes actuaciones y del acto administrativo que se dicte. Es mi voto.”.-----

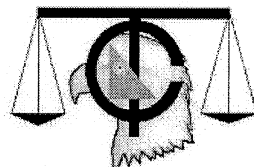
Posteriormente, tomó intervención en las actuaciones el Dr. Miguel LONGHITANO, exponiendo a continuación su Voto: “...En tal sentido, cabe señalar que las actuaciones bajo examen vienen precedidas del voto del Sr. Vocal de Auditoría de este Tribunal de Cuentas, por lo que a fin de evitar reiterar innecesariamente los antecedentes detallados por el primero, me remito a ellos en honor a la brevedad, y en función de compartir el análisis efectuado por el preopinante, adhiero a las medidas propuestas, inclinando mi voto en idéntico sentido.-----

Sin perjuicio de ello, es dable hacer una salvedad en lo atinente a lo indicado por el Auditor Fiscal, C.P.N. Rafael Aníbal Choren, en su Informe N° 596/08 Letra TCP - ADM CENTRAL (obrante a fs. 106/108), en cuanto concluye: “...*Por lo manifestado precedentemente, sugiero a la Vocalía de Auditoría la aprobación de las presentes actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder posteriormente al funcionario saliente, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo XIII de la Ley Provincial N° 50, y Art. 3° de la Ley Provincial N° 264, modificada por su similar N° 619...*” (lo resaltado no corresponde al original).-----

En este sentido, el mentado Art. 3° de la Ley Provincial N° 264, modificada por su similar N° 619, dispone: “**Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley provincial 264, por el siguiente texto: “Artículo 3°.- Los funcionarios mencionados en el artículo 1° deberán dar pleno cumplimiento a las normas que al efecto dicte el Tribunal de Cuentas, las cuales deberán tener la aprobación de la Comisión creada por esta ley, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se les efectuará un cargo preventivo automático igual al importe de los bienes que estuvieron bajo su responsabilidad y/o por**



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

*el importe total de la rendición de cuentas no efectuada **procediéndose, en esta instancia, al enjuiciamiento dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley provincial 50 y sus modificatorias fijándose, a este efecto, en tres (3) años el plazo de prescripción para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial***” (la negrita no corresponde al original).--

Respecto de las normas dictadas por este Tribunal de Cuentas al efecto de la Ley mencionada, se emitió la Resolución Plenaria N° 51/04 la cual, en su Anexo I, regula el Procedimiento para la intervención de este Tribunal de Cuentas Provincial en el Juicio de Residencia, mediante el cual se establece que los funcionarios sujetos al mismo (según lo establecido por la Constitución Provincial en su art. 190°), deberán presentar dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de cese en su cargo una Declaración Jurada por Cese de Funciones en la Mesa de Entradas de este Tribunal de Cuentas.-----

De manera que, del juego normativo se desprende que únicamente en caso de incumplimiento por parte de los funcionarios en la presentación de la Declaración Jurada – obligación dispuesta en la norma dictada por este Tribunal y en la Ley Provincial N° 264 modificada por su similar N° 619- se les aplicará un *cargo automático*, y que a su vez quedarán sujetos al enjuiciamiento dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley Provincial N° 50, fijándose sólo para estos supuestos de incumplimiento un plazo de prescripción de 3 años para ejercer la acción de responsabilidad.-----

Consecuentemente, no resulta acertado ni ajustado a Derecho la apreciación efectuada por el Auditor Fiscal en el sentido de sugerir a la Vocalía de Auditoría la aprobación de las presentes actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder posteriormente al funcionario saliente, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo XIII de la Ley Provincial N° 50 y Art. 3° de la Ley Provincial N° 264 modificada por su similar N° 619.-----

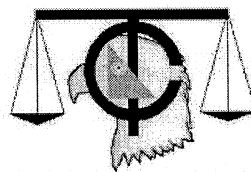
Esto último resulta una interpretación *contra legem* de la normativa que rige la materia, ya que el artículo 3° de la Ley Provincial N° 264, modificada por la Ley Provincial N° 619, **NO** resulta aplicable en los casos en que el funcionario saliente dé cumplimiento con lo prescripto por este Tribunal de Cuentas en el marco del Juicio de Residencia, esto es, la presentación de la Declaración Jurada dentro del plazo de los 5 (cinco) días posteriores al cese en sus funciones.-----

En este sentido, si bien es cierto que en el transcurso de los 4 meses que debe durar el Juicio de Residencia puede determinarse que no corresponde formular Acusación en contra del funcionario saliente, esto no quita que *a posteriori*, en caso de determinarse la existencia de un perjuicio fiscal, pueda iniciarse contra éste el procedimiento previsto en el Capítulo XIII de la Ley Provincial N° 50.-----

Pero en caso de encontrarse en la hipótesis mencionada en el párrafo precedente, deberá estarse al plazo dispuesto en el Art. 75 de la Ley Provincial N° 50, ya que éste constituye la



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

pauta temporal aplicable a todos los procedimientos que se inicien por este Tribunal, con motivo de la existencia de un perjuicio fiscal atribuible a un funcionario.-----

De manera que, a modo de conclusión y para tomar en cuenta en los casos venideros, es dable dejar sentado que, en caso de presentación de la Declaración Jurada en término por parte de los funcionarios que cesen en sus cargos, no corresponde la aplicación del plazo de 3 (tres) años establecido en el Art 3° de la Ley Provincial N° 264, modificada por la Ley Provincial N° 619.-----

Así, para que sea procedente la aplicación del plazo indicado en el Art. 3° de la Ley Provincial N° 264, modificada por su similar N° 619, deben darse tres condiciones, esto es, (1) que el funcionario saliente no cumplimente la normativa dictada por este Tribunal en el marco del Juicio de Residencia, (2) que se aplique un cargo automático por parte del Tribunal de Cuentas y (3) que todo ello se lleve a cabo dentro del plazo de 4 meses estipulado por el Art. 190 de la Constitución Provincial.-----

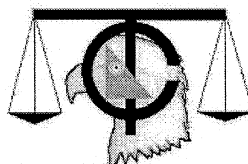
Por último, y tomando en consideración que los plazos dispuestos en la Resolución Plenaria N° 51/04 se encuentran vencidos en todos los expedientes analizados hasta el momento, propicio que se incluya también en el Acuerdo Plenario que finalmente se dicte, un artículo que disponga lo siguiente: Advertir a la Secretaría Contable para que en el futuro cumpla y haga cumplir los plazos dispuestos en la Resolución Plenaria N° 51/04. Es mi voto.”-----

En tercer término, las actuaciones fueron analizadas por el C.P.N. Dr. Claudio Alberto RICCIUTI, transcribiendo seguidamente, también, su Voto: “...Comenzando su análisis, cabe señalar que las presentes actuaciones llegan a mi consideración precedidas del Voto de los Sres. Vocales, obrantes a fs. 109/118, por lo que, a fin de no resultar sobreabundante, me remito al relato de los antecedentes que conforman el caso efectuado por el Sr. Vocal de Auditoría.-----

Analiza el Vocal el Informe Letra: T.C.P. - Adm. Central N° 596/08 (fs. 106/108), producido por el Auditor Fiscal C.P. Rafael Aníbal CHORÉN designado a través de la Resolución Plenaria N° 110/08; dejando constancia que, sin perjuicio de las conclusiones del Auditor en cuanto a la ausencia de elementos que permitan presumir la existencia de perjuicio fiscal por parte del funcionario enjuiciado en el período analizado, se encuentran vencidos los plazos legales establecidos para que formule acusación, toda vez que la Resolución Plenaria N° 51/04 indica que la acusación, de así corresponder, deberá materializarse una vez presentado el Informe por parte del Auditor Fiscal, quién deberá presentar éste dentro de los sesenta (60) días, contados desde la presentación de la Declaración Jurada del funcionario saliente. Por lo que, señala, si se contempla el lapso de tiempo transcurrido desde la presentación de la Declaración Jurada (02/07/08), concluye que a la fecha se encuentra fenecido el plazo dentro del cual se podría haber formulado acusación conforme lo establecido por el art. 190 de la Constitución Provincial, Ley



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Provincial 264 y Resolución Plenaria Nº 51/04, deviniendo en consecuencia en abstracto el tratamiento de la cuestión analizada.-----

Indica, entonces, que no podría formular acusación en virtud de encontrarse vencidos los plazos legales para la sustanciación del trámite por ante este Tribunal, sumado a ello la circunstancia que el Auditor Fiscal interviniente no halló elementos que permitan aseverar la configuración de perjuicio fiscal que le fuera imputable al funcionario saliente.-----

Destaca, asimismo, que la demora en el trámite no es imputable al Auditor Fiscal ya que este fue designado el día 21 de agosto de 2008, mediante la Resolución Plenaria Nº 110/08, obrante a fs. 12, no constando en autos la fecha en que fuera notificado. Con lo cual, propicia se haga saber a la Secretaria Privada del Cuerpo Plenarios de Miembros que, una vez remitidos los expedientes conforme surge a fs. 11 vta., deberá procurarse la designación del Auditor Fiscal en lo inmediato a fin de estarse a los plazos señalados por el art. 190 de la Constitución Provincial, Ley Provincial 264 y Resolución Plenaria 51/04.-----

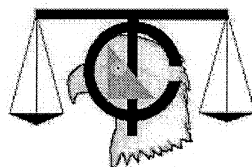
Por otra parte, considera oportuno poner en conocimiento del Sr. Auditor Fiscal que en Juicios de Residencia debe colectarse la información requerida a los juzgados oficiados, toda vez que la misma reviste extrema importancia al momento de formular la aprobación definitiva de las rendiciones o la acusación del funcionario sujeto a Juicio de Residencia.---

En función de todo lo cual, impulsa su voto en el sentido de dictar un acto administrativo que disponga: *“a- Declarar la culminación del presente trámite en virtud de encontrarse fenecidos los plazos legales dentro del cual este Tribunal puede formular acusación, sin perjuicio de que en dicho trámite no se constató la existencia de perjuicio fiscal ocasionado por el Sr. Néstor Adolfo Contini. b- Hacer saber a la Secretaria del Plenario de Miembros que una vez recepcionados los expedientes que tramitan Juicios de Residencia deberá procurarse la designación del Auditor Fiscal en lo inmediato a fin de estarse a los plazos señalados por el art. 190 de la Constitución Provincial, Ley 264 y Resolución Plenaria 51/04. c- Hacer saber al Auditor Fiscal C.P.N. Rafael Chorén que en Juicios de Residencia deberá recabarse la información requerida a los juzgados oficiados, poniendo de resalto que a tal fin cuenta con el asesoramiento Jurídico que se dispone en la Resolución Plenaria de designación. d- Del Acto Administrativo que se dicte, notificar a la Secretaria del Plenario de Miembros, Mónica L. Arnold y al Auditor Fiscal C.P.N. Rafael Chorén, para su conocimiento. e- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se libre cédula a la Comisión de Seguimiento Legislativo de Juicio de Residencia a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo I de la Resolución Plenaria Nº 51/04, informando lo actuado con remisión de copia íntegra y certificada de las presentes actuaciones y del acto administrativo que se dicte.”*-----

A su turno, el Sr. Vocal Legal se pronuncia a fs. 116/118, adhiriendo a las medidas propuestas por el preopinante e inclinando su voto en idéntico sentido; señalando que no



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

resulta acertado ni ajustado a Derecho la apreciación efectuada por el Auditor Fiscal en el sentido de sugerir a la Vocalía de Auditoría la aprobación de las presentes actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder posteriormente al funcionario saliente, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo XIII de la Ley Provincial N° 50 y Art. 3° de la Ley Provincial 264 modificada por su similar 619. Por cuanto resulta una interpretación *contra legem* de la normativa que rige la materia, ya que el artículo 3° de la Ley Provincial 264, modificada por la Ley Provincial N° 619, no resulta aplicable en los casos en que el funcionario saliente dé cumplimiento con lo prescripto por este Tribunal de Cuentas en el marco del Juicio de Residencia, esto es, la presentación de la Declaración Jurada. Dejando sentado, a modo de conclusión y para tomar en cuenta en los casos venideros, que en caso de presentación de la Declaración Jurada en término por parte de los funcionarios que cesen en sus cargos, no corresponde la aplicación del plazo de 3 (tres) años establecido en dicha norma. El que, considera, se aplica únicamente en los casos en que el funcionario saliente no cumplimente la normativa dictada por este Tribunal en el marco del Juicio de Residencia, y el Tribunal hubiera determinado la aplicación de un cargo automático contra éste, todo ello dentro del plazo de 4 (cuatro) meses dispuesto por el Art. 190 de la Constitución Provincial.-----

Finalmente, y tomando en consideración que los plazos dispuestos en la Resolución Plenaria N° 51/04 se encuentran vencidos en todos los expedientes analizados hasta el momento, propicia que se incluya también en el Acuerdo Plenario que finalmente se dicte, un artículo que disponga lo siguiente: *“Advertir a la Secretaría Contable que en el futuro cumpla y haga cumplir los plazos dispuestos en la Resolución Plenaria N° 51/04.”*.-----

Mi Opinión. Por mi parte, analizadas las actuaciones y las consideraciones expuestas en el Voto de los Vocales preopinantes, comparto parcialmente el acto administrativo propuesto por el Sr. Vocal de Auditoría a fs. 114/115.-----

Ello así, por cuanto, a mi criterio, de una interpretación armónica de las normas contenidas en el Anexo I de la Resolución Plenaria N° 51/04, aprobada por la Resolución N° 02/04 de la Comisión de Seguimiento Legislativo del Juicio de Residencia, no surge que el plazo con que el Vocal Acusador cuenta para formular acusación sea de cuatro (4) meses, computado desde la presentación de la Declaración Jurada por Cese de Funciones. Toda vez que dicha norma expresa que las investigaciones especiales no serán atraídas por el Auditor Fiscal responsable del Juicio de Residencia, debiendo ser concluidas por los Auditores designados oportunamente y en los términos que determina la reglamentación interna de este Tribunal.-----

Asimismo, al referirse al Informe del Auditor Fiscal a cargo del Juicio de Residencia establece que, con la información relevada en las diferentes etapas de control, elaborará dicho Informe en el cual propondrá al Vocal de Auditoría la aprobación definitiva de las



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

rendiciones o la acusación, esto último en caso de presumir la existencia de perjuicio fiscal. De darse éste supuesto la norma contempla un traslado al ex funcionario, a los efectos que presente su descargo en el término de diez (10) días. Evacuado el cual y finalizado el procedimiento previo, de considerar el Vocal suficientemente acreditada la presunción de perjuicio fiscal, concretará su acusación, la que tramitará en el marco de las normas contenidas en el Capítulo XIII de la Ley Provincial 50 y el art. 3 de la Ley Provincial 264, modificada por su similar 619.-----

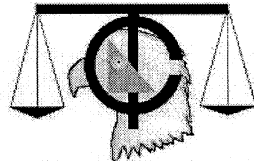
Ahora bien, el procedimiento del Juicio de Residencia concluye con la aprobación del Informe del Auditor Fiscal por parte del Cuerpo Plenario de Miembros y la información de todo lo actuado a la Comisión de Seguimiento Legislativo de Juicio de Residencia, indicando la norma que *“Las actuaciones correspondientes a la aplicación de sanciones por apartamientos formales y a la sustanciación de los Juicios de Responsabilidad, continuarán su curso sin perjuicio del Informe Final y las resoluciones que sobre éste adopte la Comisión de Seguimiento Legislativo de Juicio de Residencia.”* .-----

Al respecto, este Cuerpo en Pleno ha sostenido que en virtud del acotado marco temporal de actuación que reconoce el Juicio de Residencia, conforme el artículo 1° de la Ley Provincial 264, modificada por su similar 619, no resulta procedente mantener *sine die* al funcionario saliente sometido a este proceso. Ello así, por cuanto la principal virtualidad de este Instituto es la de mantener al sujeto pasivo del mismo en el ámbito de la Provincia por el plazo fijado por el artículo 190 de la Constitución Provincial y el artículo 1° de la citada norma legal, para que pueda rendir cuentas de su gestión. Circunstancia que no implica liberar al funcionario de la responsabilidad derivada del manejo de fondos públicos durante su función, si la misma surgiera o pudiera determinarse con posterioridad al vencimiento del plazo del Juicio de Residencia; siendo ese precisamente el sentido del plazo de prescripción establecido en el artículo 3° de dicha norma.-----

Por ello, si el estado de las actuaciones no permitiera determinar fehacientemente dicha circunstancia, no sólo en lo que refiere a la existencia de perjuicio sino a su cuántum, al momento de concluir el Juicio de Residencia, por depender tal comprobación de un proceso investigativo que tramita en forma independiente, pero por hechos originados durante el período del mandato analizado; el objeto del Juicio de Residencia se habría agotado en la medida en que la detección de las irregularidades se efectuara precisamente en dicho contexto; correspondiendo, en consecuencia, concluir el procedimiento previsto en el Anexo I de la Resolución Plenaria N° 51/04; sin perjuicio de proseguir con las investigaciones que se estén sustanciando en relación con hechos originados durante la actuación por el cargo y el período enjuiciado, mediante el procedimiento expresamente previsto para esos casos conforme lo dispone la citada Resolución Plenaria; siendo el plazo



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

de prescripción para ejercer las acciones resarcitorias por el eventual perjuicio ocasionado el previsto por el artículo 3 de la Ley Provincial 264, modificada por su similar 619.-----
Tal criterio ha sido sostenido, entre otros, en los Expedientes del registro de este Tribunal de Cuentas N° 371/05 caratulado: "S/JUICIO DE RESIDENCIA GABRIEL ARMANDO ALLEGRO" (Acuerdo Plenario N° 970), N° 368/05 caratulado: "S/JUICIO DE RESIDENCIA RODRIGO GUSTAVO DUMÉ DECRETO PROVINCIAL 3182/05" (Acuerdo Plenario N° 1148) y N° 393/05 caratulado: "S/ JUICIO DE RESIDENCIA MONCHIETTI EDUARDO A. DTO. PROV. 3280/05" (Acuerdo Plenario N° 974).-----

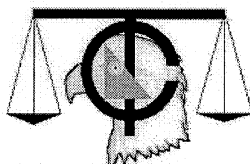
En el marco de dichas actuaciones, se dieron por concluidos los procedimientos de Juicio de Residencia sustanciados a los nombrados, haciendo reserva que en caso de detectarse y comprobarse posteriormente a la conclusión de las mismas, la existencia de presunto perjuicio fiscal originado en la actuación del enjuiciado en el cargo y período analizados, éste quedaría sometido al enjuiciamiento previsto en el Capítulo XIII de la Ley Provincial 50 y art. 3 de la Ley Provincial 264, modificada por su similar 619; e informando de todo lo actuado a la Comisión de Seguimiento Legislativo del Juicio de Residencia prevista en los arts. 5 y 6 de la citada Ley, con copia íntegra y certificada de las actuaciones.-----

Dicha Comisión se pronunció expresamente acerca de esta reserva, en el caso de los Expedientes Letra: T.C.P. N° 368/05, 371/05 y 393/05, a través de las Notas Letra: D.C. (Com. J.R.) N° 315/06, 256/06 y 147/06, respectivamente, donde el entonces Presidente de la citada Comisión informaba a este Tribunal que *"...se ha decidido, en coincidencia con el criterio de ese Tribunal, en mayoría por la clausura del Juicio de Residencia con la reserva de que en caso de detectarse y comprobarse posteriormente a la conclusión del subexamine, la existencia del presunto perjuicio fiscal originado en la actuación del enjuiciado en el cargo y período mencionado, éste quedará sometido al enjuiciamiento previsto en el capítulo XIII de la Ley Provincial N° 50 y art. 3 de la Ley Provincial N° 264, modificada por su similar N° 619..."*. Copia de las citadas Notas se incorporan a las presentes actuaciones a fs. 119/121.-----

Criterio, éste, que continuó viéndose reflejado en posteriores pronunciamientos de este Tribunal emitidos hasta el mes de Septiembre de 2008, tales como el Acuerdo Plenario N° 1632 (Expediente N° 450/07, caratulado: "S/ JUICIO DE RESIDENCIA SR. DANIEL EDGARDO PONCE D.N.I. 12.189.827 DECRETO ACEPTACION RENUNCIA 2907/07"), Acuerdo Plenario N° 1633 (Expediente N° 391/07, caratulado: "S/ JUICIO DE RESIDENCIA SR. OMAR DELUCA -DNI 12.725.953- RENUNCIA ACEPTADA MEDIANTE DECRETO PROVINCIAL N° 2731/07"), Acuerdo Plenario N° 1664 (Expediente N° 522/07, caratulado: S/ JUICIO DE RESIDENCIA DN. HECTOR ARMANDO CAVALOTTI, DNI 13.772.592 DECRETO ACEPTACION RENUNCIA N°



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



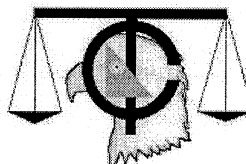
TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

3396/07”), Acuerdo Plenario Nº 1667 (Expediente Nº 587/07, caratulado: “S/ JUICIO DE RESIDENCIA BASCONSUELO CLAUDIO G. DP 3460/07”), Acuerdo Plenario Nº 1669 (Expediente Nº 486/07, caratulado: “S/ JUICIO DE RESIDENCIA SR. GUSTAVO ALFREDO BLANCO D.N.I. Nº. 13.392.507 – DECRETO ACEPTACION RENUNCIA Nº 3052/07”), Acuerdo Plenario Nº 1673 (Expediente Nº 545/07, caratulado: “S/ JUICIO DE RESIDENCIA SR. RAMIRO CARLOS CABALLERO D.N.I. 21.514.789 – DECRETO ACEPTACION RENUNCIA Nº 3381/07), Acuerdo Plenario Nº 1674 (Expediente Nº 533/07, caratulado: “S/ JUICIO DE RESIDENCIA SRA. SILVIA BEATRIZ BEBAN – DP 3395/07”), Acuerdo Plenario Nº 1677 (Expediente Nº 29/08, caratulado: “S/ JUICIO DE RESIDENCIA SR. DAVID NELSON GUEVARA DNI 10.529.275 – FINALIZACION MANDATO IPAUS”), y Acuerdo Plenario Nº 1681 (Expediente Nº 520/07, caratulado: “S/ JUICIO DE RESIDENCIA SRA. ELIDA DEHEZA – DNI Nº 11.826.312 – DIRECTORIO I.P.A.U.S.S.”). El que, incluso, fue seguido por el Sr. Vocal Legal en los Acuerdos Plenarios Nº 1664, 1667, 1669, 1673, 1674, 1677 y 1681. En función de lo cual, entiendo corresponde en esta instancia dar por concluido el procedimiento del Juicio de Residencia sustanciado al Sr. Néstor Adolfo CONTINI por su desempeño en el cargo de Secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, en el período comprendido desde el 18/12/07 hasta el 01/07/08; aprobando el Informe Letra: T.C.P. - Adm. Central Nº 596/08 del Auditor Fiscal C.P. Rafael Aníbal CHORÉN, por el que concluye que de acuerdo a la documental colectada en las actuaciones no existen elementos que permitan presumir la existencia de perjuicio fiscal como consecuencia del desempeño del nombrado en el citado cargo durante el período analizado, haciendo reserva que en caso de detectarse y comprobarse posteriormente a la conclusión de las presentes actuaciones, la existencia de presunto perjuicio fiscal originado en la actuación del enjuiciado en el cargo y período mencionados, éste quedará sometido al enjuiciamiento previsto en el Capítulo XIII de la Ley Provincial 50 y art. 3 de la Ley Provincial 264, modificada por su similar 619.-----

En cuanto a la advertencia propuesta por el Sr. Vocal Legal a fs. 118, creo oportuno rememorar en el presente que, a través de la Resolución Plenaria Nº 103/07, se creó el Registro de Investigaciones Especiales y Juicios de Residencia, con el objeto de afianzar el seguimiento del trámite de los procedimientos y actuaciones sustanciadas en el marco de las Resoluciones Plenarias Nº 71/02 y 51/04, aprobada por la Resolución de la Comisión Legislativa de Seguimiento de Juicio de Residencia Nº 002/04 y verificar el cumplimiento de las pautas establecidas por las citadas normas, el que se encuentra a cargo de la Prosecretaría Contable, debiendo informar mensualmente al Secretario Contable la evolución y estado de tales actuaciones. Indicando la norma que todo acto administrativo que disponga la instrucción o conclusión de una investigación especial en el marco de la



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Resolución Plenaria N° 71/02 y el inicio o conclusión de un procedimiento de Juicio de Residencia en el marco de la Resolución Plenaria N° 51/04, deberá ser notificado a la Prosecretaría Contable, a los efectos de su anotación en el citado Registro. No surgiendo en este caso de las constancias obrantes en las presentes actuaciones que tal comunicación se hubiere cursado.-----

En consecuencia, en lugar de tal advertencia, propongo incluir en el acto administrativo que se dicte los siguientes artículos: “Requerir a la Secretaría y Prosecretaría Contable que, en el marco del Registro de Investigaciones Especiales y Juicios de Residencia creado por la Resolución Plenaria N° 103/07, verifiquen el cumplimiento de las pautas temporales fijadas por el Anexo I de la Resolución Plenaria N° 51/04 por parte de los Auditores Fiscales designados para sustanciar los procedimientos de Juicios de Residencia”. “Requerir a la Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros que, acorde lo dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución Plenaria N° 103/07, remita a la Prosecretaría Contable copia certificada de todo acto administrativo que disponga el inicio o conclusión de un procedimiento de Juicio de Residencia en el marco de la Resolución Plenaria N° 51/04, a los efectos de su anotación en el Registro de Investigaciones Especiales y Juicios de Residencia.”.-----

Con tales consideraciones, impulso mi voto en el sentido de dictar el acto administrativo que disponga: a) Dar por concluido el procedimiento del Juicio de Residencia sustanciado al Sr. Néstor Adolfo CONTINI por su desempeño en el cargo de Secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, en el período comprendido desde el 18/12/07 hasta el 01/07/08, tramitado por el Expediente Letra: T.C.P. N° 221/08 del registro de este Tribunal de Cuentas, caratulado: “S/ JUICIO DE RESIDENCIA NESTOR ADOLFO CONTINI”.-----

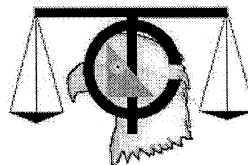
b) Aprobar el Informe Letra: T.C.P. - Adm. Central N° 596/08 del Auditor Fiscal C.P.N. Rafael Aníbal CHOREN, obrante a fs. 106/108 del Expediente citado en el Punto precedente, por el que concluye que, de acuerdo a la documental colectada en las actuaciones, no existen elementos que permitan presumir la existencia de perjuicio fiscal en el desempeño del nombrado en el citado cargo durante el período analizado.-----

c) Hacer reserva que en caso de detectarse y comprobarse posteriormente a la conclusión de las presentes actuaciones, la existencia de presunto perjuicio fiscal originado en la actuación del enjuiciado en el cargo y período mencionados, éste quedará sometido al enjuiciamiento previsto en el Capítulo XIII de la Ley Provincial 50 y art. 3 de la Ley Provincial 264, modificada por su similar 619.-----

d) Informar de todo lo actuado a la Comisión de Seguimiento Legislativo del Juicio de Residencia prevista en los arts. 5 y 6 de la Ley Provincial 264, modificada por su similar 619, con copia íntegra y certificada de las actuaciones.-----



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

e) Requerir a la Secretaría y Prosecretaría Contable que, en el marco del Registro de Investigaciones Especiales y Juicios de Residencia creado por la Resolución Plenaria N° 103/07, verifiquen el cumplimiento de las pautas temporales fijadas por el Anexo I de la Resolución Plenaria N° 51/04 por parte de los Auditores Fiscales designados para sustanciar los procedimientos de Juicios de Residencia.-----

f) Requerir a la Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros que, una vez recepcionados los expedientes que tramitan Juicios de Residencia, realice la tramitación administrativa tendiente a la designación del Auditor Fiscal en forma inmediata, atento los plazos señalados por el art. 190 de la Constitución Provincial, Ley Provincial 264 y Resolución Plenaria 51/04; haciéndole saber, asimismo que, acorde lo dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución Plenaria N° 103/07, deberá remitir a la Prosecretaría Contable copia certificada de todo acto administrativo que disponga el inicio o conclusión de un procedimiento de Juicio de Residencia en el marco de la Resolución Plenaria N° 51/04, a los efectos de su anotación en el Registro de Investigaciones Especiales y Juicios de Residencia.-----

g) Hacer saber al Auditor Fiscal C.P. Rafael Aníbal CHORÉN que en los procedimientos de Juicios de Residencia deberá recabarse la información requerida a los juzgados oficiados, poniendo de resalto que a tal fin cuenta con el asesoramiento jurídico que se dispone en la Resolución Plenaria de designación.-----

h) Notificar, con copia certificada del mismo, al Sr. Néstor Adolfo CONTINI, a la Comisión de Seguimiento Legislativo del Juicio de Residencia con copia íntegra y certificada de las actuaciones, a la Secretaría Contable, Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros y Auditor Fiscal interviniente; así como a la Prosecretaría Contable a los efectos de su anotación en el Registro de Investigaciones Especiales y Juicios de Residencia creado por la Resolución Plenaria N° 103/07.-----

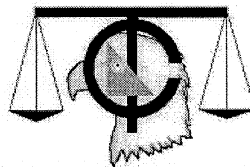
En función del criterio sentado precedentemente, considero oportuna en esta instancia una nueva intervención del Sr. Vocal de Auditoría, a los efectos que analice los fundamentos plasmados en el presente y se pronuncie al respecto. Es mi voto.”.-----

En consecuencia, a fs. 131/135, toma una nueva intervención el C.P.N. Luis Alberto CABALLERO, la que a continuación se transcribe: “...Vuelven a esta Vocalía de Auditoría el Expediente del Registro de este Tribunal de Cuentas **Letra: T.C.P. N° 221 año 2008, caratulado: "S/ JUICIO DE RESIDENCIA NESTOR ADOLFO CONTINI"**, a los efectos de tomar intervención con relación a los nuevos fundamentos introducidos por el Sr. Presidente en las presentes actuaciones, a fin que merítue los mismos por no compartir el acto administrativo propuesto en mi ponencia.-----

Es así y con relación a la disidencia planteada, debo en esta instancia aclarar, que este Vocal de Auditoría además de los fundamentos dados el voto agregado en las presentes



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

actuaciones y que tengo por reproducido, se ha pronunciado en diversas oportunidades en relación a la interpretación sobre el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial de los funcionarios sometidos a juicio de residencia, en donde sostuve: *“...Avanzando en el análisis es dable aclarar que el plazo de prescripción señalado por el art. 75 de la Ley N° 50 es aplicable a todos los cuentadantes por igual, no siendo ajustado a derecho que se someta a otro régimen a los funcionarios sujetos a Juicio de Residencia, según los términos del art. 3° de la Ley Provincial N° 264.*-----

Ley 264 regula el régimen de Juicio de Residencia cuyo instituto se encuentra integrado por distintas normas.-----

Así el art. 190 de la Constitución Provincial señala que: “Los funcionarios que ocupen cargo electivos, así como los ministros, secretarios y subsecretarios, tanto provinciales como municipales y comunales, no podrán abandonar la Provincia hasta después de cuatro meses de terminadas sus funciones, salvo expresa autorización de la Legislatura Provincial o de los cuerpos deliberativos municipales, por estar sometidos a juicio de residencia.-----

Que dicho juicio de residencia se encuentra reglamentado por Ley Provincial N° 264, conforme modificación de la ley Provincial N° 619, la que en el art. 1° establece: “Los funcionarios mencionados en el artículo 190 de la Constitución Provincial estarán sujetos a Juicio de Residencia ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia por el término de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización de su mandato o cese de su mandato...”-----

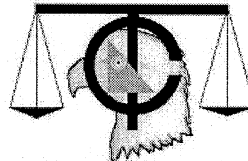
El artículo 3° de la ley 264, según sustitución de la ley 619 señala que: “Los funcionarios mencionados en el artículo 1° deberán dar pleno cumplimiento a las normas que al efecto dicte el Tribunal de Cuentas, las cuales deberán tener la aprobación de la Comisión creada por esta ley, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se les efectuará un cargo preventivo automático igual al importe de los bienes que estuvieron bajo su responsabilidad y/o por el importe total de la rendición de cuentas no efectuada procediéndose, en esta instancia, al enjuiciamiento dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley provincial 50 y sus modificatorias fijándose, a este efecto, en tres (3) años el plazo de prescripción para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial.”-----

Surge con claridad, que lo atinente al régimen de Juicio de Residencia tiene un trámite específico en cuanto al procedimiento y prescripción, que se extiende a tres (3) años, siempre que se haya hecho respecto al Funcionario un “cargo preventivo automático”, lo cual requiere que dentro del plazo de cuatro (4) meses, a contar desde el cese de las funciones.-----

Dicho cargo podrá formularse cuando el funcionario no haya presentado Declaración Jurada por Cese de Funciones, trayendo como consecuencia que se fije en tres (3) años el



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

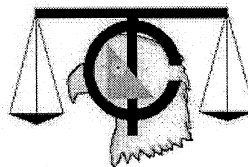
plazo de prescripción para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial estatuida por la ley 50, plazo que no puede aplicarse supletoriamente a otros supuestos cuando estos tienen un régimen de prescripción especial como el señalado por el art. 75 de la Ley 50.--- Que a fin de posicionarnos en tal instituto y hacer extensivo el régimen indicado por el art. 3° de la Ley 264 es requisito que se cumpla lo dispuesto por dicha norma – falta de presentación de Declaración Jurada por cese de Funciones y cargo preventivo automático dentro del plazo de cuatro meses de dicho cese -, circunstancias estas no observadas en los presentes actuados, lo que veda toda posibilidad hacer uso de elementos de distintos institutos a fin de extender la responsabilidad del estipendiario cuando ha operado la prescripción específica indicada en el art. 75 de la ley N° 50, por lo que no corresponde distinguir la situación de cada uno de los funcionarios involucrados en estos obrados ya que a todos ellos se le aplica el mismo régimen legal...”, Expediente de la Gobernación N° 002619 MO año 2007 caratulado “SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EMERGENCIA GIMNASIO ESCUELA N° 4 “REPARACIÓN DEL PISO PEQUET, ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES Y PINTURA” y Expediente del Tribunal de Cuentas Letra SC N° 138/2008 “INVESTIGACIÓN S/ PREPARACIÓN DEL PISO PEQUET, ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES Y PINTADO, ETC. DEL GIMNASIO DE LA ESCUELA N° 4 (REF. EXPTE. 2619-MO-07); Expediente del registro de la Gobernación Letra N° 002610-MO- 2007 caratulado “S/ SEC. INFRAESTRUCTURA Y EMERGENCIA ESC. N 19 DE RIO GRANDE TRABAJOS ELECTRICOS”; Expediente Letra SC N° 167 año 2008 caratulado “INVESTIGACION S/ PINTURA INTEGRAL INTERIOR Y SECTOR ESCALERA DE ACCESO PRINCIPAL JARDIN N° 2” (Expte. 03193-MO-07), -entre muchos otros-, con lo que quiero manifestar con ello, que comparto el criterio jurídico formulado por el Vocal Legal en su ponencia.-----

Por su parte, sostiene el Presidente que en otros expedientes en los que se llevaron adelante juicios de residencia, y se dieron por concluidos haciendo la reserva que en caso de detectarse y comprobarse posteriormente a la conclusión de las mismas, la existencia de perjuicio fiscal, el enjuiciado quedaría sometido al enjuiciamiento previsto en el Capítulo XIII de la Ley Provincial 50 y art. 3 de la Ley Provincial 264.-----

No comparto el criterio expuesto por el Presidente en su voto, pues no existe ningún derecho que se pueda reservar en forma unilateral para el futuro, toda vez que los derechos no se reservan, se ejercen, en consecuencia si finalizado el juicio de residencia se detecta un perjuicio fiscal, el ejercicio de la acción de responsabilidad se encuentra limitado al plazo de prescripción establecido en el artículo 75 de la Ley 50, con la excepción, anteriormente analizada, esto es, que el funcionario saliente no presentare la declaración jurada, en cuyo caso tiene un trámite específico en cuanto al procedimiento y prescripción, que se extiende



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

a tres (3) años, siempre que se haya hecho respecto al Funcionario un “cargo preventivo automático”, conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley 264.-----

No enerva lo expuesto, la circunstancia que, de hecho, el ex Legislador Miguel Ángel Portela, como Presidente de la Comisión Legislativa de Seguimiento de Juicio de Residencia haya emitido las notas que el Sr. Presidente adjunta para avalar la “reserva del derecho”, toda vez que no esta previsto dentro de las atribuciones acordadas a la Comisión por la ley, que alguno de sus miembros o todos en su conjunto, interpreten el alcance de la Ley 264, pues no surge del artículo 5°, como tampoco del artículo 6° de la ley citada, que la misma tenga competencia para ello, por lo que no queda mas que concluir, que las notas agregadas a fs 119, 120 y 121, carecen de sustento normativo y por lo tanto no generan un antecedente apto para interpretar el instituto jurídico de la prescripción del Juicio de Residencia estatuido en la Ley 264 y su modificatoria Ley 619.-----

Por último y con relación a la advertencia a la Secretaría Contable propuesta en el acto administrativo por el Vocal Legal, comparto en este punto, la propuesta formulada por el Presidente, toda vez que según se encuentra establecido en la Resolución Plenaria N° 103/2007, se encuentra en cabeza de la Prosecretaría Contable el Registro de investigaciones especiales y juicios de residencia para que en el futuro verifique el cumplimiento de los plazos fijados en la Resolución Plenaria N° 51/04 por los Auditores Fiscales que sean designados en los Juicios de Residencia.-----

Por lo expuesto entiende el suscripto que corresponde en esta instancia y dentro de las pautas temporales dadas por las normas citadas, dar por aprobada en forma definitiva las rendiciones formuladas, impulsando mi voto tendiente a que se dicte acto administrativo propuesto por el suscripto a fs 114, agregando a ello dos artículos en el que se disponga: 1.- Requerir a la Secretaría y Prosecretaría Contable que, en el marco del Registro de Investigaciones Especiales y Juicios de Residencia creado por la Resolución Plenaria N° 103/07 verifiquen el cumplimiento de las pautas temporales fijadas por el Anexo I de la Resolución Plenaria N° 51/04 por parte de los Auditores Fiscales designados para sustanciar los procedimientos de Juicio de Residencia. 2.- Requerir a la Secretaría Privada del Cuerpo de Miembros que, acorde lo dispuesto por el artículo 3° de la Resolución Plenaria N° 103/07, remita a la Prosecretaría Contable copia certificada de todo acto administrativo que disponga el inicio o conclusión de un procedimiento de Juicio de Residencia en el marco de la Resolución Plenaria N° 51/04, a los efectos de su anotación en el Registro de Investigaciones Especiales y Juicios de Residencia.-----

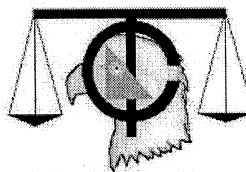
Conforme las argumentaciones expuestas y la nueva intervención solicitada por el Presidente, corresponde se de intervención al Vocal Legal a fin que se expida sobre los argumentos expuestos, y una vez ello remitir el expediente a Presidencia a fin que elabore el Acuerdo Plenario respectivo. Es mi voto.”.-----



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

REGISTRADO BAJO EL Nº

001828



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Por su parte, el Dr. Miguel LONGHITANO hace lo propio a fs. 136/145, en los siguientes términos: "...Vuelve a este Vocal Abogado en ejercicio de la Presidencia el **Expediente: T.C.P. del registro del Tribunal de Cuentas de la Provincia N° 221/08 caratulado: "S/ Juicio de Residencia Néstor Adolfo Contini"** a los fines de fundar mi voto.-----

En tal sentido, cabe señalar que las actuaciones bajo examen vienen precedidas de los votos del Vocal de Auditoría así como del Vocal Contador de este Tribunal de Cuentas, junto con el proyecto de Acuerdo Plenario, indicándose por parte del Vocal Contador C.P.N. Claudio Ricciutti, una serie de consideraciones que este Vocal Abogado en ejercicio de la Presidencia estima conveniente aclarar.-----

En primer término considero relevante aclarar la cuestión atinente a la enumeración que se efectuó de una serie de Acuerdos Plenarios anteriores, en los cuales adherí a la postura que se seguía en el Tribunal en lo atinente al tratamiento de los Juicios de Residencia, concretamente respecto a la aplicación del plazo de prescripción de 3 (tres) años dispuesto en el Art. 3° de la Ley 264, modificada por Ley 619, en todos los casos de Juicios de Residencia, sin distinción respecto a la presentación o no de la Declaración Jurada por parte de los funcionarios salientes.-----

Concretamente la discrepancia viene como consecuencia de que en los Acuerdos Plenarios, referidos a Juicios de Residencia de funcionarios, se incluye como artículo 3° el siguiente texto: *"Hacer reserva que en caso de detectarse y comprobarse posteriormente a la conclusión de las presentes actuaciones, la existencia de presunto perjuicio fiscal originado en las actuaciones del enjuiciamiento en el cargo y período mencionados, éste quedará sometido al enjuiciamiento previsto en el Capítulo XIII de la Ley Provincial 50 y art. 3 de la Ley Provincial 264, modificada por su similar 619"*.-----

En tal sentido suscribí los Acuerdos Plenarios Nros. 1664, 1667, 1669, 1673, 1674, 1677 y 1681 en los cuales se incluyó la mencionada reserva que luego de un profundo análisis de la normativa aplicable (Ley 264 modificada por Ley 619) considero que no resulta acertada ni ajustada a derecho por provenir de una interpretación contra legem de la normativa que rige la cuestión; todo ello atento las razones expuestas en mi voto de fecha 16/03/09 agregado a fs. 116/118.-----

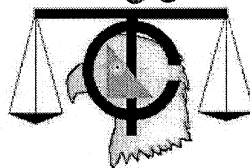
Aquí debo remarcar que recién ahora el Vocal Contador C.P.N. Claudio Ricciutti expone "in extenso" las razones que llevaron a este Tribunal de Cuentas ha incluir la aludida cláusula de reserva en todos los precedentes administrativos (entiéndase Acuerdos Plenarios) hasta el mes de septiembre de 2008; guardando "in pectore" los fundamentos de dicho criterio.--- Es más en ninguno de los precedentes citados por el preopinante en su voto (Ej: Acuerdos Plenarios Nros. 1664, 1667, 1669, 1673, 1674, 1677 y 1681) se hace



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

REGISTRADO BAJO EL N°

001828



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

una fundamentación de porqué correspondería la mentada reserva salvo la inclusión a modo de clisé del aludido artículo 3º.-----

Efectuada la aclaración anterior, corresponde indicar que si bien las opiniones vertidas generan precedentes aplicables en casos futuros ello no puede sostenerse cuando la interpretación que se venía efectuando entra en contradicción y/o colisión con los presupuestos legales señalados por la normativa vigente (Ley 264 modificada por Ley 619). Esto me lleva directamente a considerar los requisitos y/o condiciones para que el “precedente administrativo” (Eje: Acuerdos Plenarios en donde se incluyo la aludida cláusula de reserva) sea considerado como válido y vinculante para casos futuros en los cuales se resuelva la misma cuestión.-----

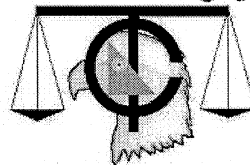
En tal sentido en un excelente trabajo doctrinal del Dr. Carlos Manuel GRECCO titulado “APUNTES PARA UNA TEORÍA DE LAS AUTOLIMITACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, publicado en La Revista de Derecho Administrativo, 1993, Año 5, págs. 317/342 dicho doctrinario expresa que: *“Cuantitativamente la fuente más importante de heterolimitaciones de la administración es, naturalmente, la ley, pues el principio de legalidad reclama, justamente, la sujeción genérica de la administración a la ley. La legalidad también limita, pues, la autovinculación y no son frecuentes los casos en que la administración, al instalar su autolimitación, no hace más que recibir el contenido de la norma legislativa previa”* (pág. 323).-----

Partiendo de lo dicho por el mencionado doctrinario resulta claro que siendo “La Ley” la fuente más importante de heterolimitaciones a los cuales debe atenerse la Administración, obviamente al instalarse una autolimitación ella debe sujetarse al principio de legalidad en el cual consecuentemente se recepcione el contenido de la norma legislativa previa, mediante una interpretación que respete sus términos cuando ella no presenta dificultades en su exégesis.-----

Es así que en la interpretación que corresponde dar al artículo 3º de la ley 264 modificado por ley 619, debe tenerse en cuenta que al limitarse la ley a estos términos, es decir, que únicamente se extiende el plazo de prescripción a 3 años para los funcionarios que omiten presentar la declaración jurada y además exige el denominado cargo automático por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia, no corresponde presumir olvidos u omisiones involuntarias del legislador debiendo dar preeminencia a la literalidad de la ley provincial 619, pues la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Conf. CSJN, Laboratorios Rontag s/Ley 16.463 – Recurso de hecho, L.15.XXXIII del 12.05.98 con cita de Fallos, 311:1042). En otras palabras cuando una norma –en su interpretación- no



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

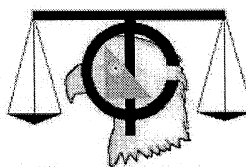
presenta dificultad corresponde en el caso la aplicación de la exégesis literal del texto normativo por ser claro y no admitir duda alguna.-----

Asimismo cabe resaltar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente que no puede presumirse la inconsecuencia del legislador, y en razón de ello la interpretación de las leyes debe ser coincidente con la coherencia y razonabilidad que priman en la esencia de la normas jurídicas, pues: *“La inconsecuencia o la falta de previsión jamás se supone en el legislador y por esto se reconoce como principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darle una interpretación que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con su valor y efecto”* (Fallos: 312:1614, entre tantos otros).-----

Pero abordando de lleno lo dicho por la doctrina respecto a las condiciones y/o requisitos para que el precedente administrativo pueda ser considerado vinculante para casos futuros, el mencionado autor dijo: *“Contiguo a la “praxis” administrativa –aunque no totalmente identificable con ella –se halla el precedente administrativo, genéricamente definible como “el supuesto ya resuelto anteriormente en un caso similar” (villar Palasí) Las diferencias entre prácticas y precedente no se agotan en la circunstancia de referirse éste más a la resolución concreta que a una actividad exclusivamente interna de la administración; mientras el precedente siempre muestra carácter formalizado, la “praxis” puede, o no, conformar una conducta de esa naturaleza. Por otro lado, un comportamiento singular puede, en línea de máxima y dentro de un mismo procedimiento, vincular al órgano administrativo; el precedente supone reiteración. Para respaldar el carácter vinculante de los precedentes administrativos se apela, por un lado, a fundamentos que en una de las escasas monografías dedicadas a la cuestión ... se califican de falsos o erróneos (así la doctrina de los propios actos que se manifiesta en el plano de una misma relación jurídica; la equidad, que no regula por sí misma las relaciones jurídicas, sino que simplemente atempera la eventual severidad de los efectos normativos mediante una valoración de los principios generales del derecho y los sentimientos de justicia material con relación al caso concreto; la analogía, que, ante todo, es una técnica dirigida a integrar supletoriamente el ordenamiento jurídico), y por otro a los principios de igualdad, seguridad jurídica y buena fe, los cuales resultarían quebrantados si existiendo un precedente determinado la administración siguiera un criterio distinto. El principio de igualdad que primordialmente implica igualdad frente a las cargas públicas (art. 16 de la Constitución Nacional) y la relativa autonomía de la administración cuando media atribución discrecional de la potestad, parecen fundar adecuadamente la vinculación de la administración al precedente. No se puede, con todo, perder de vista que la acción administrativa está indefectiblemente comprometida a fluctuar entre coherencia y*



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

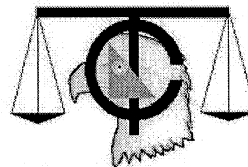
flexibilidad. La actuación autovinculatoria que el precedente supone no determina, por ello, la subsiguiente obligación de conservar invariablemente criterios engarzados a circunstancias o presupuestos antecedentes que se puedan haber visto modificadas. El perpetuo fluir de las cosas habilita, pues, la rectificación de criterios precedentes. Si esto vale para el precedente judicial, con mayor razón se justifica en el campo de la acción administrativa más apegada a lo concreto... La doctrina que estudia el grado de vinculación jurídica del precedente administrativo suele demandar ciertos requisitos para que la vinculación resulte factible: identidad subjetiva e identidad objetiva como recaudos positivos; interés público y legalidad del precedente como requisitos negativos ...A fin de considerar vinculante al precedente administrativo es necesario que tanto la actuación constitutiva del precedente como aquella con respecto a la cual dicho precedente se alega provengan de la misma administración pública ... La aplicación del precedente requiere también la coincidencia de objeto o contenido, causa y forma (identidad objetiva). No obstante, es en la causa de la decisión (circunstancias o presupuestos fácticos) donde se debe verificar la identidad... A los requisitos enunciados se añade, conforme fue expresado, el interés público como requisito negativo. El interés público –cualquiera que sea el concepto que de él se mantenga- es uno de los principios centrales que orienta la acción administrativa... La eficacia vinculante del precedente es, por lo demás, excluida en los casos de ilegalidad del precedente, pues, como indica Díez-Picazo, “una ilegalidad no justifica una cadena de ilegalidades ni el ordenamiento puede amparar la perpetuación de situaciones antijurídicas. El fundamento del carácter vinculante del precedente es la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica; en ningún caso, la igualdad y la seguridad antijurídicas” (véase autor y obra citada, páginas 334/336, el subrayado es propio).-----

A partir de lo indicado, puede colegirse claramente que los “precedentes administrativos” no siempre resultan el criterio rector más acertado al momento de resolver las cuestiones que pueden suscitarse en el marco de una actuación administrativa (como deja entrever el Vocal C.P.N. Claudio Ricciutti en su Voto), ello en virtud de que en ciertas ocasiones el Órgano administrativo encargado de expedirse, puede comprender que la interpretación que se venía realizando resulta errónea o *contra legem*.-----

Volviendo al tema que nos ocupa, esto es, los Juicios de Residencia, y la Ley Provincial N° 264, modificada por su similar N° 619, vale la pena reiterar que en su Art. 3°, dispone: “Sustitúyese el artículo 3° de la Ley provincial 264, por el siguiente texto: “Artículo 3°.- **Los funcionarios mencionados en el artículo 1° deberán dar pleno cumplimiento a las normas que al efecto dicte el Tribunal de Cuentas, las cuales deberán tener la aprobación de la Comisión creada por esta ley, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se les efectuará un cargo preventivo automático igual al importe de los bienes que estuvieron bajo su responsabilidad y/o por el importe total de la rendición de**



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

cuentas no efectuada procediéndose, en esta instancia, al enjuiciamiento dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley provincial 50 y sus modificatorias fijándose, a este efecto, en tres (3) años el plazo de prescripción para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial” (La negrita no corresponde al original).-----

De la lectura del mismo, como dije, se desprenden claramente cuáles son los presupuestos y/o requisitos que deben darse para que resulte aplicable el supuesto de los 3 (tres) años de plazo de prescripción al que quedarían sometidos los funcionarios públicos cuando dejaran su cargo, esto es: 1) Que los funcionarios omitan (incumplan) presentar la declaración jurada al cesar en sus funciones, conforme lo dispuesto en la Resolución Plenaria Nº 51/04; y 2) La exigencia del denominado cargo preventivo automático por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia, conforme lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley 264 modificada por Ley 619 y Acuerdo Plenario Nº 1642 de fecha 28/07/08 que determina la forma en que se realizará el mentado cargo automático.-----

Obviamente que para aquellos funcionarios que presentaron la correspondiente declaración jurada ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia y consecuentemente no se les efectuó el correspondiente cargo automático NO CORRESPONDE LA EXTENSIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN EN 3 AÑOS.-----

El hecho de no haberse interpretado la citada normativa correctamente desde un comienzo no justifica, como indica el Doctrinario citado más arriba, aferrarse con uñas y dientes a los precedentes administrativos y/o acuerdos plenarios emitidos con anterioridad para resolver los casos futuros, ya que ello implicaría una “cadena de ilegalidades” inadmisibles.-----

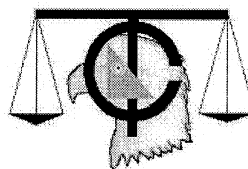
Ello así porque desde el momento en que se logra un análisis completo e interpretación coherente con la letra de la ley, ello debe prevalecer por sobre el *precedente contra legem*, ya que uno de los principios jurídicos que se imponen al momento de resolver un expediente administrativo, es justamente el de la Seguridad Jurídica, a la cual sólo se llega cuando la interpretación y aplicación de la normativa se realiza conforme a Derecho, de lo contrario el fundamento del carácter vinculante del precedente sería la igualdad y la seguridad “antijurídicas”, cuestión que como vimos no puede justificar los mismos.-----

Continuando con el análisis de las apreciaciones realizadas por el entonces Presidente, actual Vocal Contador, C.P.N. Claudio Ricciutti, debo indicar que no comparto en lo absoluto lo indicado en cuanto a la “reserva” que se hace para el caso de “detectarse y comprobarse posteriormente a la conclusión de las mismas (refiriéndose a los Juicios de Residencia), la existencia de un presunto perjuicio fiscal originado en la actuación del enjuiciado en el cargo y período analizados, éste quedaría sometido al enjuiciamiento previsto en el Capítulo XIII de la Ley Provincial y art. 3 de la Ley Provincial 264”.-----

Puntualmente, no comparto el razonamiento efectuado en lo atinente a la “reserva” que se pretende realizar, ya que es sabido que los derechos no se *reservan* sino que se *ejercen*. En



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

este sentido, ya indique al tratar este tipo de actuaciones, que para el caso de que *posteriormente* al vencimiento del plazo de 4 meses dispuesto para la duración de los Juicios de Residencia, se determinara la existencia de un perjuicio fiscal, se podría ir contra el funcionario saliente, pero siempre dentro del plazo de 1 año, dispuesto como pauta temporal genérica para los procesos en cabeza de este organismo, conforme a lo estipulado en el Art. 75 de la Ley Provincial N° 50.-----

A efectos de no resultar reiterativo, me remito a todo lo indicado previamente respecto a los presupuestos fácticos que deben existir para que resulte viable la aplicación del plazo de 3 (tres) años dispuesto en el art. 3° de la Ley Provincial N° 264, modificada por su similar N° 619.-----

Asimismo, debo indicar que tampoco comparto la apreciación efectuada por el entonces Presidente, actual Vocal Contador, en cuanto a las facultades “interpretativas” que se le atribuyen a la Comisión de Seguimiento Legislativo, las cuales no surgen de la norma así como tampoco del análisis de la discusión parlamentaria de la misma; pues por el contrario, en ambas se dispone meramente una función de “seguimiento” y/o “control” en cabeza de aquélla.-----

Así, el entonces Presidente, actual Vocal Contador, indica que la cuestión atinente a la “reserva” fue sometida al análisis de la Comisión Legislativa la cual se pronunció expresamente al respecto (¿?), concordando con el Tribunal en cuanto a que el funcionario quedaría sometido al enjuiciamiento previsto en el capítulo XIII de la Ley Provincial N° 50 y art. 3° de la Ley Provincial N° 264, modificada por su similar N° 619.-----

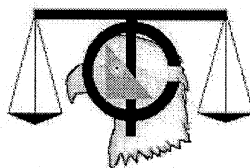
Sobre este punto, debemos remitirnos a la fuente normativa que regula las funciones de la Comisión Legislativa en cuestión.-----

Así el Art. 6° de la Ley Provincial N° 619, dispone: “*Sustitúyase el artículo 6° de la Ley provincial 264, por el siguiente texto: “Artículo 6°.- **Dicha Comisión tendrá como objeto y función el seguimiento de las actuaciones del Juicio de Residencia, a cuyo efecto estará facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público nacional, provincial, municipal, o comunal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije. Al respecto no se podrá oponer disposición alguna que establezca el secreto de información y/o documentación requerida, salvo que la misma se funde en disposición de jerarquía superior**”.*-----

Como se ve de la norma supra transcrita, se desprende claramente cuáles son las facultades de la Comisión de Seguimiento Legislativo, específicamente se indica como objeto y función de la misma “*el seguimiento de las actuaciones*” y para ello se la faculta para “*solicitar informes, documentos, y antecedentes*”, por lo que resultan claras sus atribuciones de seguimiento-control de los Juicios de Residencia, y a tales efectos la



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

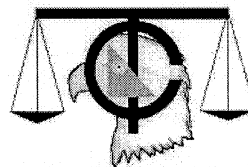


TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

posibilidad de requerir información al respecto. Por el contrario **no existe** una sola mención a que dicha Comisión de Seguimiento tenga facultades y/o atribuciones interpretativas respecto de los alcances de la ley 619 como las que pretende otorgarle el Vocal Contador.-- En efecto: nada dice la norma respecto a la posibilidad de que la mentada Comisión de Seguimiento pueda efectuar interpretaciones de la normativa en cuestión (¿?). Por lo que si la norma claramente indica que el plazo de 3 años se aplica para los casos en que los funcionarios *no cumplimenten las exigencias dispuestas por este Tribunal de Cuentas* (es decir, presentación de la Declaración Jurada) nada puede decir en contradicción con esto, ya que, además de no contar con facultades interpretativas, se estaría apartando de la normativa que rige la materia, y que resulto suficientemente explícita al momento de legislar la cuestión atinente a los plazos de prescripción aplicables para cada supuesto.----- A mayor abundamiento se transcribe lo que se dijo sobre esta cuestión en el debate parlamentario por el que luego se aprobara la norma bajo análisis: “...se establece respecto del Juicio de Residencia la composición de una **comisión** integrada por legisladores y por miembros del poder político y del Tribunal de Cuentas **para que efectúen un control...**” (Lo resaltado no es del original).----- Asimismo se indicaba: “...Estamos en un Estado republicano, cada Estado tiene su responsabilidad, la Legislatura Provincial tiene la obligación y como responsabilidad de confeccionar leyes. Cuando hay algún tipo de dudas **¿quién interpreta las leyes? NO son los legisladores, señor presidente; es la Justicia, el Poder Judicial quien debe interpretar las leyes...**”. (Lo resaltado no es del original).----- Consecuentemente, no se le pueden atribuir funciones a la Comisión más allá de las que se acordaran al momento de sancionar la Ley 619, modificatoria de la 264, ya que en caso de haberlo querido de esa manera, se hubieran atribuido facultades interpretativas, más allá de las de control. Por el contrario se dispusieron expresamente facultades de “seguimiento” e incluso el propio legislador entendió en su momento que la posibilidad de interpretar dicha norma “únicamente” se encuentra en cabeza del Poder Judicial, y **no del Legislativo** o de la Comisión de Seguimiento Legislativa creada para los juicios de residencia.----- Por lo que mal podría justificarse una interpretación *contra legem* por el hecho de que la Comisión se hubiera expedido al respecto, ello, porque ésta no cuenta con facultades para ello, y por ende su interpretación resulta inocua respecto de esta cuestión, y a su vez, porque tal interpretación resulta contradictoria con lo que, expresa y claramente, dispone la norma.----- En resumen: el plazo de 3 años dispuesto en el Art. 3° de la Ley Provincial 264, modificada por su similar 619, se aplica únicamente para los casos en que el funcionario saliente NO hubiese presentado la Declaración Jurada, en este caso se le aplicará un cargo automático y queda sometido al enjuiciamiento previsto en el Capítulo XIII de la Ley Provincial N° 50. --



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Contrariamente, en el caso de que sí se presentara la Declaración Jurada, dicho plazo no se aplica, y la facultad de poder ir contra el funcionario saliente, para el caso de determinarse la existencia de un perjuicio fiscal una vez vencido el plazo de 4 meses dispuesto para los Juicios de Residencia, se podrá igual ir contra aquél, pero siempre dentro del plazo de 1 año dispuesto en forma genérica para los procedimientos en cabeza de este Organismo de Contralor, tal y como se encuentra establecido en el Art. 75 de la Ley Provincial N° 50.-----
Por último, respecto a la modificación que el entonces Presidente, actual Vocal Contador, planteara respecto a lo propuesto por este Vocal Abogado, actualmente en ejercicio de la Presidencia, en el sentido de advertir a la Secretaria Contable para que cumpla y haga cumplir los plazos dispuestos en la Normativa en lo referente a los Juicios de Residencia, el Sr. Presidente indicó que ello en realidad le competente a la Prosecretaría Contable, la cual se haya a cargo del Registro de Investigaciones Especiales y Juicios de Residencia, creada por Resolución Plenaria N° 103/07.-----

Al respecto se señala que es la Prosecretaría Contable la que debe informar mensualmente al Secretario Contable la evolución y estado de tales actuaciones. Indicando la norma que “todo acto administrativo que disponga el inicio o conclusión de un procedimiento de Juicio de Residencia en el marco de la Resolución Plenaria N° 54/04, deberá ser notificado a la Prosecretaría Contable, a los efectos de su anotación en el citado Registro, no surgiendo en este caso de las constancias obrantes en las presentes actuaciones que tal comunicación se hubiere cursado.-----

Debo indicar que esto último, resulta erróneo, ya que de fs. 25, 27 y 29 de las presentes actuaciones, surge que el Auditor a cargo de la investigación notificó a la Prosecretaría Contable, así como a la Secretaría Contable, respecto del Juicio de Residencia que se seguía contra el funcionario saliente.-----

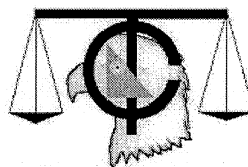
Así, contrariamente a lo indicado, la Prosecretaría Contable tuvo fehaciente conocimiento de las actuaciones de referencia, por lo que incumplió la función que le fuera otorgada por medio de Resolución Plenaria N° 103/07, tal como indicara el Vocal Contador, ya que en ningún momento advirtió al Sr. Secretario Contable respecto del vencimiento de los plazos de todos los Juicios de Residencia que se estaban suscitando en el Tribunal.-----

Tampoco cumplió con su obligación de informar mensualmente al Secretario Contable la evolución y estado de tales actuaciones, ya que ello no surge de ninguna de las constancias de las actuaciones analizadas hasta el momento.-----

Con las aclaraciones precedentes, impulso mi voto en el sentido que fuera indicado en un comienzo por el Sr. Vocal de Auditoría, incorporando la aclaración efectuada, en cuanto a la obligación de la Prosecretaría Contable -y no de la Secretaria Contable- de controlar el cumplimiento de los plazos dispuestos en la normativa, y para que informe mensualmente al Secretario Contable respecto de la evolución y el estado de las actuaciones. Es mi voto.”-



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Por las consideraciones expuestas, este Cuerpo Plenario de Miembros, por la mayoría absoluta de sus integrantes conforme lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Provincial 50, y en el marco de las facultades conferidas por la Ley Provincial 264, modificada por su similar 619, y la Resolución Plenaria N° 51/04, aprobada por la Resolución N° 02/04 de la Comisión de Seguimiento Legislativo del Juicio de Residencia, **RESUELVE**:-----

ARTICULO 1°.- Dar por concluido el procedimiento del Juicio de Residencia sustanciado al Sr. Néstor Adolfo CONTINI por su desempeño en el cargo de Secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, en el período comprendido desde el 18/12/07 hasta el 01/07/08, tramitado por el Expediente Letra: T.C.P. N° 221/08 del registro de este Tribunal de Cuentas, caratulado: "S/ JUICIO DE RESIDENCIA NESTOR ADOLFO CONTINI".-----

ARTICULO 2°.- Aprobar el Informe Letra: T.C.P. - Adm. Central N° 596/08 del Auditor Fiscal C.P.N. Rafael Aníbal CHORÉN, obrante a fs. 106/108 del Expediente citado en el Artículo precedente, por el que concluye que, de acuerdo a la documental colectada en las actuaciones, no existen elementos que permitan presumir la existencia de perjuicio fiscal en el desempeño del nombrado en el citado cargo durante el período analizado.-----

ARTICULO 3°.- Informar de todo lo actuado a la Comisión de Seguimiento Legislativo del Juicio de Residencia prevista en los arts. 5 y 6 de la Ley Provincial 264, modificada por su similar 619, con copia íntegra y certificada de las actuaciones.-----

ARTICULO 4°.- Requerir a la Secretaría y Prosecretaría Contable que, en el marco del Registro de Investigaciones Especiales y Juicios de Residencia creado por la Resolución Plenaria N° 103/07, verifiquen el cumplimiento de las pautas temporales fijadas por el Anexo I de la Resolución Plenaria N° 51/04 por parte de los Auditores Fiscales designados para sustanciar los procedimientos de Juicios de Residencia.-----

ARTICULO 5°.- Requerir a la Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros que, una vez recepcionados los expedientes que tramitan Juicios de Residencia, realice la tramitación administrativa tendiente a la designación del Auditor Fiscal en forma inmediata, atento los plazos señalados por el art. 190 de la Constitución Provincial, Ley Provincial 264 y Resolución Plenaria 51/04; haciéndole saber, asimismo que, acorde lo dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución Plenaria N° 103/07, deberá remitir a la Prosecretaría Contable copia certificada de todo acto administrativo que disponga el inicio o conclusión de un procedimiento de Juicio de Residencia en el marco de la Resolución Plenaria N° 51/04, a los efectos de su anotación en el Registro de Investigaciones Especiales y Juicios de Residencia.-----

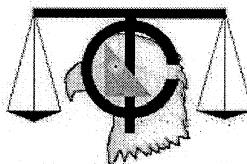
ARTICULO 6°.- Hacer saber al Auditor Fiscal C.P. Rafael Aníbal CHORÉN que en los procedimientos de Juicios de Residencia deberá recabarse la información



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

RECORRIDO BAJO EL N°

001828



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

requerida a los juzgados oficiados, poniendo de resalto que a tal fin cuenta con el asesoramiento jurídico que se dispone en la Resolución Plenaria de designación.-----

ARTICULO 7°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, desglosar el original de los Votos obrantes a fs. 109/118 y 122/145 del Expediente T.C.P. N° 221/08, a los efectos de su incorporación al registro de Acuerdos Plenarios conjuntamente con el presente, debiendo ser reemplazado en las presentes actuaciones por copia certificada del mismo. Ello, acorde lo dispuesto por la Circular N° 06/08.-----

ARTICULO 8°.- Notificar, con copia certificada del presente, al Sr. Néstor Adolfo CONTINI, a la Comisión de Seguimiento Legislativo del Juicio de Residencia con copia íntegra y certificada de las actuaciones, a la Secretaría Contable, Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros y Auditor Fiscal interviniente; así como a la Prosecretaría Contable a los efectos de su anotación en el Registro de Investigaciones Especiales y Juicios de Residencia creado por la Resolución Plenaria N° 103/07.-----

Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, se registrará, notificará y publicará el presente Acuerdo Plenario en el Boletín Oficial de la Provincia, y se realizará la tramitación administrativa de rigor.-----

No siendo para más, se da por finalizado el acto en el lugar y fecha indicados ut supra. Fdo:
VOCAL ABOGADO (PRESIDENTE) Dr. Miguel LONGHITANO – VOCAL
CONTADOR (VOCAL DE AUDITORIA) C.P.N. Luis Alberto CABALLERO – VOCAL
CONTADOR: C.P.N. - Dr. Claudio Alberto RICCIUTI.-----

ACUERDO PLENARIO N° 001828

CPN/Dr. Claudio A. Ricciuti
Vocal Contador
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.P.N. Luis Alberto Caballero
Vocal de Auditoría
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Dr. Miguel LONGHITANO
VOCAL ABOGADO
PRESIDENTE
Tribunal de Cuentas de la Provincia